



Héctor Tajonar

Corrupción y abulia política

La corrupción en México asciende, mientras el país desciende. El más reciente informe de Transparencia Internacional (TI) indica que México empeoró en combate a la corrupción, al pasar del lugar 72 en 2007 y 2008 al 89 en 2009, con una puntuación de 3.3 en una escala de 0 a 10. En tanto que el informe de la Cepal sobre la situación social en América Latina estima que al final de 2009 el número de pobres en México aumentará a 37 millones y el de indigentes será de 12 millones.

Existen amplias evidencias de que ambas realidades están estrechamente vinculadas: a mayor corrupción, menor desarrollo y progresivo deterioro de la justicia. El propio reporte de TI muestra que las prácticas corruptas contribuyen a la pérdida masiva de los recursos para promover un desarrollo equitativo y sostenible, además de propiciar debilidad institucional y gobernabilidad deficiente.

Aparte de ello, la corrupción tiene un alto costo financiero. Si partimos de la investigación realizada por la consultora independiente CEI Consulting & Research, SC, la que se muestra que entre 1975 y 2005, en la República Mexicana se construyó, en promedio, sólo la mitad de la infraestructura carretera, hospitalaria, hidráulica, eléctrica, aeroportuaria, educativa o de vivienda que debió haberse construido de acuerdo con el gasto ejercido para ese propósito, se puede hacer un cálculo del monto que podría alcanzar la corrupción. Puede estimarse que la pérdida de recursos públicos por malversación de fondos podría ascender el

año próximo a 315 mil millones de pesos, lo cual representa la mitad del gasto destinado a inversión en infraestructura para 2010, dado a conocer por el presidente Calderón el 18 de noviembre pasado, en Michoacán, que será de 630 mil millones de pesos. El cálculo no es descabellado, en virtud de que los niveles de corrupción no han descendido de 2005 a la fecha sino, por el contrario, han aumentado de acuerdo con los informes de Transparencia Internacional.

En este contexto, no podemos permanecer indiferentes ante el presunto fraude cometido por funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, dado a conocer ayer en un comunicado oficial del Departamento de Justicia de los Estados. Se trata de una red delictiva que entregó sobornos por millones de dólares a cuatro funcionarios de la CFE, a cambio de contratos lucrativos otorgados a la compañía con sede en Texas.

El informe indica que a los funcionarios de la CFE se les otorgaría 10 por ciento de las utilidades generadas por los contratos corruptos, que ascendieron a 37 millones de dólares. Está detenido uno de los operadores del soborno, llamado John Joseph O'Shea, quien era el enlace con los funcionarios de la CFE, y está acusado de conspiración, violación de anticorrupción, lavado internacional de dinero y falsificación de registros. También fue detenido el ciudadano mexicano Fernando Maya Basurto, quien ha admitido su responsabilidad de haber fungido como representante de los funcionarios de la CFE, así como de la elaboración de facturas

y contratos falsos. En respuesta al documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la CFE emitió un boletín en el que informa que ha levantado una denuncia ante la Procuraduría General de la República "contra quien resulte responsable". En medio de la avalancha de corrupción que aplasta al país, el asunto puede parecer menor, pero no lo es si se le ubica en el contexto de la reciente desaparición de Luz y Fuerza del Centro.

A pesar de sus graves consecuencias sociales, económicas y políticas, México padece un estado de abulia política frente a la corrupción. El diagnóstico neurológico de la abulia se aplica perfectamente al ámbito del quehacer público nacional, en materia de combate a la corrupción: La abulia es un estado mental (social o político) en el que el individuo (la sociedad o el gobierno) parece(n) haber perdido la motivación para actuar o tomar decisiones. Se trata de un deterioro de la voluntad que se traduce en un sentimiento de impotencia ante una situación que se presenta como irresoluble. Sin embargo, mientras la abulia individual tiene un origen psicológico, las causas de la abulia política son de otro orden: complacencia, cinismo, pragmatismo político deformado, encubrimiento, complicidad.

Sin sustento ético, la política se pervierte, convirtiéndose en una suma de negocios y juegos de intereses particulares con cargo al erario público. Acabar con la corrupción impune requiere de mayor autonomía para el IFAI y la Auditoría Superior de la Federación pero, sobre todo, de voluntad política. ■ M

hectortajonar@yahoo.com.mx



**La corrupción
impide el
desarrollo
equitativo y
sostenible,
además de
propiciar
debilidad
institucional
y goberna-
bilidad
deficiente**

